

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de noviembre de dos mil veintiuno (2021)

REFERENCIA

EXPEDIENTE No.: 11001 33 35 010 2013 00617 00.
ACCIONANTE: ÁLVARO VIVAS BOTERO.
ACCIONADA: NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
CLASE: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO.
DEL DERECHO.

De conformidad con el informe secretarial que antecede, se procederá a determinar si en el caso de estudio hay lugar a prescindir de las audiencias y proferir sentencia anticipada.

Sea lo primero señalar, que el artículo 182A del C.P.A.C.A., faculta al Juez para proferir sentencia anticipada sin necesidad de celebrar audiencia presencial o virtual, es decir, antes de celebrar audiencia; entre otros, en los siguientes eventos: **(i)** cuando el asunto sea de puro derecho; **(ii)** cuando no haya que practicar pruebas, **(iii)** cuando solo se solicite tener como pruebas las documentales aportadas con la demanda y la contestación, y sobre ellas no se hubiese formulado tacha o desconocimiento, y, **(iv)** cuando las pruebas solicitadas por las partes sean impertinentes, inconducentes o inútiles.

Entonces, cumpliendo lo dispuesto en el artículo antes citado, se procede a verificar en el presente asunto, si están dadas las condiciones para prescindir de las audiencias del juicio oral.

En el presente proceso se pretende que se declare la nulidad del Oficio No. OP 20133100001381 del 10 de enero de 2013, a través del cual la entidad accionada le negó al accionante el reconocimiento de la *PRIMA ESPECIAL DE SERVICIOS DEL 30%*; con el correspondiente restablecimiento de derecho.

Acto seguido, se analizará la existencia de excepciones previas por resolver y el decreto de pruebas.

I. EXCEPCIONES PREVIAS.

La **NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN** allegó contestación en término, propuso como excepciones previas las denominadas *CADUCIDAD* y *PRESCRIPCIÓN*.

Con referencia a la primera exceptiva señalada en precedencia, resuelve el Despacho de la siguiente manera:

Se entiende por caducidad de la acción, al fenómeno procesal en virtud del cual se pierde la posibilidad de hacer uso de la acción judicial por el transcurso del tiempo fijado por la ley, que tiene como objetivo dar seguridad jurídica a las actuaciones de la administración.

Para el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral existe un término perentorio de cuatro (4) meses dispuesto por la ley 1437 de 2011 artículo 164, para contar la caducidad de la acción, el cual empieza a contarse a partir del día siguiente de la notificación, publicación o ejecutoria del acto administrativo demandado.

Sin embargo, es de recordar que el mismo artículo, señala que la demanda podrá iniciarse en cualquier tiempo cuando se dirija contra actos que reconozcan o nieguen prestaciones de tipo periódico, no siendo aplicable tal figura para el caso que nos ocupa; habida cuenta que el demandante actualmente percibe una pensión, por lo tanto, le asiste el derecho a solicitar el reconocimiento de la prima peticionada en las pretensiones de la demanda, y de accederse a lo solicitado, es claro que incidiría en la reliquidación de la prestación social ya reconocida. En tal sentido, será negada esta exceptiva.

Por otra parte, frente a la exceptiva de **PRESCRIPCIÓN**, se observa que el artículo 180 (Núm. 6º) del CPACA determinó que se tramita como previa cuando constituye extinción de derecho y, por consiguiente, se entiende que puede ser también considerada como excepción de fondo cuando la extinción del derecho no es absoluta sino parcial. Esto significa que la excepción de

prescripción se puede tomar como excepción mixta, por lo que será el tipo de controversia la que determina si se debe estudiar como excepción de fondo o previa; razón por la cual la excepción de prescripción se resolverá con la sentencia.

Las otras excepciones propuestas por la entidad accionada, serán resueltas al momento de proferir el respectivo fallo, toda vez que son catalogadas como de fondo; éstas son las que denominó "*CARENCIA DE OBJETO e INOPONIBILIDAD DE LA SENTENCIA DEL 29 DE ABRIL DE 2014 Y DEL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2019 A LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN*".

Así las cosas, teniendo en cuenta que esta Agencia Judicial no considera necesario proponer excepciones previas de oficio, se entiende agotada esta etapa procesal.

II. PRUEBAS PARA DECIDIR DE FONDO

La parte demandante aportó prueba documental obrante a folios 2 a 12 del expediente electrónico. En tal sentido, se procederá a incorporar dichas pruebas al plenario con el valor legal que corresponda. De otro lado, no solicitó práctica de pruebas diferentes a las aportadas al plenario.

Por su parte, la **NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN** no solicitó práctica de pruebas, como tampoco allegó prueba alguna al plenario.

Conforme lo anterior, se advierte que las pruebas obrantes en el plenario son las pertinentes que le permiten al Despacho pronunciarse de fondo, de manera que no hay lugar a practicar pruebas.

Resuelto lo anterior, entonces, la **FIJACIÓN DEL LITIGIO** se centrará en determinar si el demandante tiene derecho o no al reconocimiento y pago de la *PENSIÓN ESPECIAL DE SERVICIOS DEL 30%*, con los consecuentes ajustes de ley.

Por lo expuesto, el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá,

DISPONE

PRIMERO.- DECLARAR no probada la excepción de *CADUCIDAD* propuesta por la entidad accionada.

SEGUNDO.- DECLARAR que no existen más excepciones previas por resolver.

TERCERO.- INCORPORAR al proceso con el valor legal que les corresponda, todos y cada uno de los documentos aportados con la presentación de la demanda, así como las legales oportunamente aportadas al proceso.

CUARTO.- Prescindir de las audiencias presenciales o virtuales y tramitar el proceso de conformidad con lo normado en el artículo 182A del C.P.A.C.A.

QUINTO.- La **FIJACIÓN DEL LITIGIO** se centrará en determinar si el demandante tiene derecho o no al reconocimiento y pago de la *PENSIÓN ESPECIAL DE SERVICIOS DEL 30%*, con los consecuentes ajustes de ley.

SEXTO.- Ejecutoriado el presente auto, devuélvase el expediente al Despacho para continuar con el trámite pertinente.

SÉPTIMO.- Reconocer personería adjetiva a **EDNA ROCÍO MARTÍNEZ LAGUNA** con cédula de ciudadanía No. **26.431.333** y Tarjeta Profesional No. **163.782** del Consejo Superior de la Judicatura, para actuar en este proceso como apoderada judicial de la **NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN**, en los términos y para los efectos del mandato conferido y obrante en el expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


JOSÉ VICENTE CIFUENTES SALAZAR
JUEZ

JGR



REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO DECIMO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
Sección Segunda
Expediente: 11001-33-35-010-2013-00617-00